

# ASISTENCIA LEGAL GRATUITA A TRAVÉS DE LA DEFENSA PÚBLICA Y SU REGULACIÓN ACTUAL

MSc. Emi Lorena Guevara Guevara \*

## RESUMEN

En este artículo, se expone la importancia del reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita como componente indisoluble del derecho a la tutela judicial efectiva. El planteamiento del tema y el estudio de las normativas que lo regulan en las diferentes materias revelaron que los servicios legales gratuitos proporcionados a través de la Defensa Pública para las personas de escasos recursos económicos tendían a ser restringidos en ciertos campos inexistentes, y se planteó la necesidad de expansión del instituto. También del estudio de las nuevas legislaciones procesales se evidenciaron esfuerzos y avances para garantizar un reconocimiento integral y efectivo del beneficio de la asistencia legal gratuita brindada por la Oficina de la Defensa Pública, con la implementación de métodos de recaudación de fondos por costas personales para garantizar la sostenibilidad del sistema, la optimización, eficacia y eficiencia del servicio, así como la cobertura a nivel nacional.

**Palabras clave:** asistencia legal gratuita, acceso a la Justicia, Defensa Pública, escasos recursos económicos, reformas procesales.

## ABSTRACT

This article exposes the importance of recognizing the right to free legal assistance as an inseparable component of the right to effective judicial wardship. The approach of the subject and study of the normatives that regulate it in the different subjects revealed that the free legal services provided through the Public Defense, for people with limited economic resources, tend to be restricted, and in certain fields non-existent, which leads to considering a need for expansion of the institute. Also, from the study of the new procedural legislation, efforts and advances were evidenced, to guarantee a comprehensive and effective recognition of the benefit of free legal assistance provided by the Office of the Public Defender, with the implementation of methods of collecting funds of personal costs to guarantee the sustainability of the system, the optimization, Effectiveness and efficiency of the service, as well as coverage at the national level.

**Keywords:** free legal assistance, access to justice, Public Defense, scarce economic resources, procedural reforms.

Recibido: 4 de octubre de 2022

Aprobado: 22 de febrero de 2023

---

\* Máster en Administración de Justicia con énfasis en Derecho Civil; jueza 3 del Juzgado Civil y Laboral de Grecia. Correo electrónico institucional: eguevarag@poder-judicial.go.cr.

## INTRODUCCIÓN

Uno de los principales logros de las sociedades democráticas es haber conseguido que se consagre como derecho fundamental la tutela judicial efectiva. El hecho de que toda persona, con independencia de su origen, estatus social, condición económica, pueda acceder a la Justicia supone un salto cualitativo democráticamente hablando, pues si todas las personas somos iguales ante la ley, también debemos ser iguales en la posibilidad de hacer valer nuestros derechos ante la jurisdicción de cualquier Estado.

Sin embargo, en la mayoría de los países de América Latina, existe una gran brecha entre el conjunto de derechos teóricos que, de una u otra manera, el sistema legal reconoce a las personas y grupos sociales, y la posibilidad de ejercicio efectivo de estos para sectores importantes de la población.

En la práctica, muchos sectores no tienen acceso a la ley ni a la Justicia, y existe un alto porcentaje de la población que vive una marginalidad jurídica relativa. Diversos factores contribuyen a explicar esta lamentable realidad; entre ellos, se podría citar el económico, la falta de políticas estables para equilibrar las posiciones de las partes en un proceso, la complejidad y duración de los procesos, etc.

Es indudable que una precaria situación económica coloca a un sujeto en desventaja en cuanto a sus vinculaciones con el sistema legal. Y la ausencia de una asistencia legal adecuada contribuye a agravar las situaciones de deficiente integración social con consecuencias delicadas y, obviamente, perjudiciales para el éxito de un proceso de desarrollo.

Para nadie es un secreto que el acceso a la Justicia enfrenta una problemática que afecta en mayor medida a los sectores más desfavorables, entendidos como aquellos de menores ingresos económicos, al igual que su capacidad para interactuar socialmente con el resto de la sociedad.

La experiencia en la judicatura ha permitido palpar el vacío que queda por llenar, para lograr equilibrar la situación desfavorable que un sector de la población enfrenta a la hora de acceder a los servicios de Justicia. También se puede asegurar que la falta de asistencia legal gratuita en las materias no penales no es un problema solamente económico, su análisis desde ese exclusivo punto de vista lo simplifica y sirve de justificación. Pero no quita que la figura de la asistencia legal gratuita sea un tema insuficientemente estudiado, y que muchos de los aspectos y problemáticas que la rodean no se solucionen debido a la falta de conocimiento y ausencia de propuestas creativas para lograrlo.

En este trabajo, se tratará el tema de la asistencia legal gratuita en Costa Rica, como un derecho que debe reconocerse a la ciudadanía que, por su condición económica o especial, la coloca en situación de desigualdad procesal ante una contienda judicial. En estos casos, el Estado debe garantizarle la igualdad, el acceso a la Justicia, el derecho de defensa, dotándola de una persona profesional en Derecho pagada por el Estado que la asista legalmente y le procure la obtención del derecho pretendido en juicio.

Se plantea la importancia del tema en primer orden, se repasan los principios que lo integran, se desarrolla la regulación del beneficio de asistencia legal gratuita a través de la Defensa Pública en las diferentes materias donde se reconoce y se reflexiona acerca de

los avances, estancamientos y retrocesos que ha sufrido la figura hasta la actualidad y luego de varias reformas procesales importantes que se han experimentado. Por último, se plantean las conclusiones que se perciben luego del planteamiento del tema.

## 1.- CONCEPTO

La asistencia legal gratuita se concibe como: “El servicio social que los abogados prestan a los necesitados del patrocinio letrado, con el objeto de obtener un derecho a ser defendidos en Justicia<sup>1</sup>.

Desde esta concepción, la asistencia legal gratuita es considerada como un beneficio procesal que la ley les otorga a las personas que, según un estudio previo, se encuentran en una situación especial de desventaja, para que puedan ser asistidas por una abogada o un abogado en juicio. Sin embargo, esa concepción debe ampliarse para ser concebida, más como un derecho, un instrumento esencial para la promoción y defensa de los derechos fundamentales de los individuos de escasos recursos económicos.

El derecho a la asistencia legal gratuita pretende establecer la igualdad de las partes en el proceso, la cual podría verse afectada ante la desigualdad económica entre las personas intervinientes en un proceso, pues una de ellas se encontraría en una situación donde no puede hacer valer sus derechos por la carencia de bienes o recursos económicos para solventar los costos que genera la intervención procesal.

Las personas que recurren a la solicitud del beneficio de la asistencia legal gratuita precisamente acuden a ello por cuanto se

encuentran en una situación jurídica especial, la cual se manifiesta en el factor económico con una carencia que les impide acceder a la tutela judicial efectiva y que, por dicho factor, se ve obstaculizada, encontrándose en evidente desventaja en relación con la otra parte.

Una vez que el beneficio le es otorgado a la parte que se encuentra en desventaja, esta queda protegida legalmente, equiparando su situación procesal con su contraparte. Se evidencia con ello que el propósito del beneficio es brindar a la persona usuaria que se encuentra en una situación jurídica especial de la asistencia técnica-legal otorgándole una abogada o un abogado y eximiéndola del pago de los gastos que se van produciendo en el proceso. Sin embargo, si bien la asistencia legal gratuita constituye un instrumento para la defensa de los derechos fundamentales de las personas carentes de recursos económicos, su otorgamiento se ha visto restringido a ciertas materias o tipos de procesos.

## 2.- IMPORTANCIA DEL TEMA

Desde el punto de vista de lo social, se evidencia que las personas de escasos recursos económicos son quienes se ven imposibilitadas de ejercer su derecho de acción ante los tribunales de justicia, pues necesitan del auxilio profesional de una persona defensora a la que no le pueden pagar los honorarios requeridos o, incluso, no pueden asumir los gastos procesales que pueda generar el proceso.

Íntimamente ligado al anterior, se presenta el aspecto jurídico que desemboca en un problema de equidad, de conocimiento y de

1 Cabanellas, Guillermo. *Diccionario enciclopédico de derecho usual*. Volumen 1. Edición 21. Argentina.

acceso a los derechos. Es una cuestión de poder ejercer las libertades y los derechos que están consagrados en las leyes y, por tanto, es algo que les interesa directamente a las personas que construyen los procesos democráticos.

La experiencia en la judicatura permite palpar el vacío que queda por llenar, para lograr equilibrar la situación desfavorable que un sector de la población enfrenta a la hora de acceder a los servicios de Justicia.

Desde esa perspectiva, no cabe duda de que la asistencia legal gratuita bien instaurada se constituye en un instrumento de equilibrio social, en un tema de interés público que se encuentra ligado con la superación de la pobreza. Para resaltar la importancia que reviste, se transcribe el pensamiento de los señores Facundo Roldán Bulnes y Gastón Vidal Queta, acerca del tema:

*El hombre humilde de nuestro país está quebrado en muchos aspectos de su persona, económica, psicológica, humana, familiar y socialmente [...]. Ha perdido la dignidad de ser humano. El que pueda defender sus derechos o hacerlos valer ante un Juez, o bien el poder ser atendido por un letrado como cualquier hombre se merece, -sin engaños y sin presiones hace indudablemente más digno a ese hombre. Si existe una posibilidad de no dejarlo excluido también de la Justicia, un gran avance hemos hecho.<sup>2</sup>*

### 3.- PRINCIPIOS QUE LO FUNDAMENTAN

El beneficio de asistencia legal gratuita se fundamenta en tres principios primordiales:

**IGUALDAD DE LAS PARTES:** Frente a la desigualdad económica, constituye un medio para aproximarse a la igualdad jurídica. Este principio se encuentra consagrado en el artículo 33 de la Constitución Política.

Asimismo, es reconocido en los principales instrumentos internacionales de los cuales Costa Rica es parte; entre ellos: el artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).

**DEFENSA EN JUICIO:** Constituye un presupuesto para un debido proceso que no puede ver vulnerado por el mezquino efecto de la pobreza. Este principio se encuentra consagrado en los artículos 39 y 41 de la Carta Magna.

**ACCESO A LA JUSTICIA:** La gratuidad de la justicia tiene como fundamento el principio de la tutela judicial efectiva, cuyo contenido esencial es el acceso a la actividad jurisdiccional que permite insertarse a los órganos de la Administración de la Justicia como una manifestación de la tutela judicial efectiva, y se materializa y ejerce a través del derecho de accionar. El derecho a la tutela judicial efectiva que se traduce en el derecho a la acción se encuentra consagrado en los artículos 27 y 41 de la Constitución Política, el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el 14 del Pacto

2 Roldán Bulnes, Facundo y Gastón Vidal Queta. (2001). *Acceso a la Justicia: propuesta para su optimización*. Buenos Aires: Editores del Puerto S. A, p. 13.



Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

A través del otorgamiento del beneficio de la asistencia legal gratuita, se elimina un obstáculo formal –onerosidad del proceso– para acceder en amparo de justicia. La participación de las abogadas y los abogados a través de la asesoría legal asegura la tutela judicial efectiva y contribuye para que el sistema judicial trabaje eficientemente para todas las personas, equiparándolas y tratando de igualarlas para que enfrenten y usen el sistema satisfactoriamente.

#### **4.- REGULACIÓN DEL INSTITUTO EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL**

No cabe duda de que es obligación del Estado procurar que cualquier persona pueda acceder libremente a los órganos jurisdiccionales para poder dirimir sus conflictos, lo cual implica un acceso libre e igualitario a la Justicia impartida por el Poder Judicial. Asimismo, la pobreza no debe constituir un elemento de vulneración de estos derechos consagrados constitucionalmente.

Sin embargo, las experiencias en Costa Rica demuestran que los servicios legales gratuitos a través de la Defensa Pública para las personas de escasos recursos económicos tienden a ser restringidos y, en ciertos campos, son inexistentes, sin que las políticas públicas hayan sido capaces de equilibrar realmente esta desigual distribución de servicios legales gratuitos. En efecto, salvo en lo que se refiere a materia penal, en el resto de las materias, los beneficios suministrados por la Defensa Pública no abarcan de forma integral todas las materias, en donde el factor económico

pueda afectar a una de las partes provocando desigualdad.

Es importante mencionar que, para el desarrollo de la figura de la asistencia legal gratuita en una materia, siempre ha privado el criterio de “carácter social” y esto ha permitido que se implemente en otras materias, tales como agraria, pensiones alimentarias y actualmente en laboral, entre otras, las cuales se han considerado igualmente con ese carácter.

Pero lo mismo no ha sucedido en materia civil, donde solo se ha implementado por medio de la Oficina de la Defensa Civil de la Víctima, la cual es una dependencia del Ministerio Público por imperio de ley, donde se brinda la protección del derecho de la víctima a ser compensada económicamente por los daños y perjuicios que le causó el delito mediante la interposición y el ejercicio de la acción civil resarcitoria.

Pero esta asistencia legal gratuita en materia civil se encuentra restringida al ámbito penal, pues el beneficio solo se brinda con ocasión de una acción civil resarcitoria. Desgraciadamente no se prevé a personas defensoras especializadas para la rama civil ni la de familia generalizada y otras, donde los sujetos involucrados también podrían estar en una posición de desigualdad procesal, debido a sus escasos recursos económicos que les impiden costarse una asistencia legal privada, con el compromiso que ello conlleva al ejercicio de su derecho de defensa y, por ende, del acceso a la Justicia.

La necesidad de expansión del instituto es latente, pero ya se notan esfuerzos y resultados. En efecto, hay que reconocer que, en los últimos años, se ha concientizado sobre el tema y se han realizados esfuerzos para

romper con las barreras que coartan el acceso a la Justicia de este sector de la población vulnerable por razones económicas.

En ese sentido, hay que resaltar que se han promulgado reformas procesales importantes que, en algunas materias, han significado un reconocimiento integral y efectivo del beneficio de la asistencia legal gratuita institucionalizada a través de Oficina de la Defensa Pública y en pro de la población meta. Pero no se puede dejar de mencionar que, en otros casos, lamentablemente la legislación promulgada ha marcado un retroceso o no ha brindado ningún aporte, como se verá de seguido.

#### 4.1- Regulación en la materia penal

Está prevista y contemplada principalmente en el artículo 152 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 13, 82, 93, 104, 265, 293, 294 y 318 del Código Procesal Penal. De acuerdo con la historia de la Defensa Pública y con las diferentes normas que la regulan, esta dependencia se encuentra encargada de brindar asesoría, representación y defensa a toda persona imputada o prevenida en un proceso penal. En esta materia, la asistencia legal gratuita que se brinda a través de la Defensa Pública permite la intervención en todas las fases del proceso, desde el primer acto hasta la finalización de la ejecución de la sanción impuesta.

La Defensa Pública se encuentra en la obligación de proveer de defensora o defensor público a la persona imputada que no pueda costearse una defensa particular. Pero previene la posibilidad de cobrar los servicios en caso de solvencia económica. Lo anterior así se encuentra contemplado en el artículo 152 de la Ley Orgánica del Poder Judicial:

*“La Defensa Pública proveerá defensor público a todo imputado o prevenido que solicite sus servicios. La autoridad que tramite la causa le advertirá que, si se demuestra que tiene solvencia económica, deberá designar un abogado particular o pagar al Poder Judicial los servicios del defensor público, según la fijación que hará el juzgador.*

También, referente a este punto, el artículo 265 del Código Procesal Penal prevé que, en todo proceso, el Estado cubrirá los gastos en relación con el imputado y las demás partes que gocen del beneficio de litigar sin el cobro de ellos. Pero cuando el imputado tenga solvencia económica, deberá pagar al Poder Judicial los servicios de defensor público o cualquier otro que haya recibido.

Para ello, se seguirá el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, respecto al defensor público. Para el cobro de los honorarios por los servicios prestados por la Defensa Pública, en estos casos, el artículo 153 de la Ley Orgánica del Poder Judicial es el que establece el procedimiento para el cobro, para lo cual dispone que el jefe de la Defensa Pública o a quien este designe gestionará la fijación y cobro ante la autoridad correspondiente, y una vez reconocidos y fijados los honorarios en sentencia firme, se emitirá una certificación con carácter de título ejecutivo que expresará el monto de los honorarios a cargo del imputado.

Para ejercer el cobro por la vía de apremio, la autoridad que conoce del proceso ordenará el embargo de bienes del deudor, en cantidad suficiente para garantizar el pago de los honorarios. Los fondos provenientes de

honorarios se depositarán en una cuenta bancaria especial y se emplearán para adquirir bienes y servicios tendientes a mejorar la Defensa Pública. Sin embargo, por la materia que se trata en la práctica, este tipo de cobros es inexistente.

Por último, la asesoría técnica en esta materia se extiende desde el primer momento de la persecución penal y hasta el fin de la ejecución de la sentencia, así se expresa el artículo 13 del Código de Procesal Penal: “Defensa técnica. Desde el primer momento de la persecución penal y hasta el fin de la ejecución de la sentencia, el imputado tendrá derecho a la asistencia y defensa técnica letrada. Para tales efectos, podrá elegir a un defensor de su confianza, pero, de no hacerlo, se le asignará un defensor público.”

Los deberes de la Defensa Pública de brindar asesoría jurídica gratuita en materia penal trascienden la fase de juicio o debate, así como las que le proceden, teniendo que extenderse hasta la fase de ejecución o de cumplimiento de la pena, incluyéndose hasta la posibilidad de plantear e impulsar un proceso de revisión de la sentencia condenatoria. La participación de la Defensa Pública en el procedimiento de revisión se encuentra prevista en el artículo 410 del Código Procesal Penal, el cual señala que:

*La revisión será interpuesta, por escrito, ante el tribunal de casación penal correspondiente. Contendrá, bajo pena de inadmisibilidad, la concreta referencia de los motivos en que se basa y las disposiciones legales aplicables [...]. Mientras que la asistencia legal gratuita con participación de la Defensa Pública en la fase de ejecución de la pena, la regula el artículo 480 del mismo cuerpo normativo al señalar que la*

*labor del defensor culminará con la sentencia firme, sin perjuicio de que continúe en el ejercicio de la defensa técnica durante la ejecución de la pena. Asimismo, el condenado podrá nombrar un nuevo defensor, en su defecto, se le nombrará un defensor público.*

Otra competencia donde interviene la Defensa Pública dentro del proceso penal brindando la asesoría legal gratuita a las personas imputadas es cuando han sido demandadas civilmente; esto es, cuando la acción civil resarcitoria es planteada dentro del proceso penal. Sin embargo, cuando el demandado civil es una persona diferente al imputado, la Defensa Pública proveerá de defensor público solo cuando se encuentre en situación de ausencia. Lo anterior así se encuentra previsto en el artículo 120 del Código Procesal Penal.

#### **4.2. En materia penal juvenil**

En la Ley de Justicia Penal Juvenil, vigente desde 1996, también se asegura la asistencia legal gratuita por medio de la Defensa Pública, para la representación y defensa de los derechos de los adolescentes sometidos a un proceso penal juvenil. En este campo, al igual que, en la materia penal de adultos, la participación del defensor debe cubrir todas las fases de este proceso, incluida la fase de juicio y las anteriores a esta, así como la fase de ejecución o cumplimiento de la sanción impuesta.

En esta ley, se instauró el deber de la institución de crear y mantener un grupo de defensores especializados en la materia. Este derecho se encuentra establecido en el artículo 37 de Ley de Justicia Penal Juvenil, al señalar que:



*Desde el inicio de la investigación y durante todo el proceso, los menores de edad deberán ser asistidos por defensores y no podrá recibírseles ninguna declaración sin la asistencia de éstos. El acusado o cualquiera de sus padres, tutores o responsables podrán nombrar un defensor particular. Si no cuentan con recursos económicos, el Estado les brindará un defensor público. Para tal efecto, el Departamento de Defensores Públicos deberá tener una sección o grupo de defensores especializados en la materia”.*

#### **4.3. En procesos de extradición**

De la misma forma, la Ley de Extradición contempla expresamente en su artículo 9, inciso e), el beneficio a la asistencia legal gratuita con la participación de defensores públicos que asesoren a aquellas personas que sean sometidas a un proceso de extradición y que carezcan de defensor. Este artículo cita expresamente: “Cuando la extradición sea solicitada, se observarán los siguientes trámites: [...] e) terminado este trámite el tribunal nombrará defensor público al indicado si no lo tuviere y dará audiencia a este y al Ministerio Público hasta por veinte días, de los cuales diez días serán para proponer pruebas y los restantes para evacuarlas”.

#### **4.4. En procesos de pensiones alimentarias**

Con la entrada en vigor de la Ley de Pensiones Alimentarias, en 1998, se determinó la obligación de brindar la asistencia técnica gratuita en estos procesos. A partir de ese

momento, la Defensa Pública, por medio de los defensores especializados, brindan la asesoría y realizan las gestiones necesarias para que el o la solicitante y su familia reciban una cuota alimentaria que cubra sus necesidades básicas.

Propiamente, este derecho a la asistencia legal gratuita se encuentra consagrado en el artículo 13 de la Ley de Pensiones Alimentarias:

*Con el fin de hacer valer los derechos aquí consignados, quienes carecieren de asistencia legal y de recursos económicos para pagarla, tendrán derecho a que el Estado se la suministre gratuitamente. Para este efecto, el Poder Judicial creará una sección especializada dentro del Departamento de Defensores Públicos.*

Para hacer valer los derechos consignados en dicha normativa, a través del Poder Judicial, se designa al Estado para la creación de una sección especializada dentro del departamento de defensoras y defensores públicos, a fin de que brinden a las personas de escasos recursos la asistencia técnica gratuita.

Resulta importante resaltar que, en esta materia, el beneficio se vio limitado, pues, en un principio, la Defensa Pública asumió la asesoría jurídica de ambas partes (actores y personas demandadas), pero posteriormente se restringió para reconocer el beneficio únicamente a la parte actora, esto de acuerdo con una interpretación realizada por la Corte Plena del artículo 13 de dicha ley, donde se dispuso en lo que interesa: “Interpretar la disposición del artículo 13 de la ley de pensiones alimentarias [...] de tal forma que la



asistencia letrada en pensiones alimentarias, únicamente se brinde a la acreedora o acreedor”<sup>3</sup>.

Esta interpretación fue confirmada mediante resolución de la Sala Constitucional, cuando dispuso:

*“La ley en cuestión pretende que el acreedor alimentario tenga efectivamente acceso a la justicia para poder exigir la pensión alimentaria que será destinada a cubrir sus necesidades, y en este sentido, cuando el artículo 13 de la Ley de estudio señala que:*

*Con el fin de hacer valer los derechos aquí consignados, quienes carecieren de asistencia legal y de recursos económicos para pagarla, tendrán derecho a que el Estado se la suministre gratuitamente, los beneficiarios de esta asesoría jurídica serán aquellos para los cuales se decretó la ley, entiéndase acreedores alimentarios, que son los que se presentan ante los estrados judiciales a hacer valer sus derechos, o sea, exigir la pensión alimentaria que les corresponde por ley para cubrir las necesidades familiares, que como ya se indicó, son deberes que nacen del núcleo familiar, de lazos de parentesco. Para estos efectos, hay que señalar además que la asistencia judicial gratuita debe considerarse como un privilegio procesal que la ley le otorga a las personas que se encuentran ante una situación*

*especial, para que pueda ser asistido por abogado y exonerado de todos los gastos del proceso ante los órganos jurisdiccionales [...]”<sup>4</sup>*

Luego la Sala Constitucional reiteró el criterio en un nuevo voto que, en lo que interesa, señala:

*[...] Se señala además que el hecho de que no se otorgue en todos los supuestos la asistencia gratuita por parte del estado, no implica que se esté violentando el derecho de defensa consagrado en el artículo 39 de la constitución política, pues la ley de pensiones alimentarias, desarrolla en su normativa, el principio del contradictorio y de bilateralidad de las partes que le permite al demandado, oponerse en el proceso, aportar la prueba y oponer las excepciones que estime pertinentes, así como impugnar las resoluciones que estime convenientes [...]., ASIMISMO HA SEÑALADO ESTA SALA, QUE TAMPOCO PODRÍA hacerse la equiparación de la defensa gratuita que por parte del estado se da en el sistema penal, al proceso alimentario, toda vez que su naturaleza es muy distinta. Si bien es cierto una consecuencia del incumplimiento de la obligación alimentaria es el apremio corporal, ello no convierte en forma alguna dicho proceso en materia penal, pues el objetivo de la ley es dotar a la parte familiar más*

3 Resolución de Corte Plena. Tomada en la sección n.º 23-01 del 4 de julio de 2001, propiamente en su artículo V. A nivel interno de la Defensa Pública, esta resolución se comunicó mediante circular n.º 24-2001 del 20 de agosto de 2001.

4 Voto n.º 6610-01 de las 15: 59 del 10 de julio de 2001. Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.

*débil y necesitada, de los medios idóneos para exigir un derecho de subsistencia y con relación a este objeto se dirime la defensa del demandado, a diferencia de los procesos penales, en los cuales el derecho de defensa va encaminado a proteger esencialmente la libertad de las personas [...]*<sup>5</sup>

De esta forma, el derecho a la asistencia legal gratuita consagrado en el artículo 13 de la Ley de Pensiones Alimenticias empezó siendo genérico tanto para la persona acreedora como para la obligada alimentaria. Pero por la vía de la interpretativa, se dirigió solo a proteger los derechos de las personas acreedoras alimentarias, lo anterior, atendiendo a que el objetivo de la ley es dotar a la parte más débil y necesitada, de los medios idóneos para exigir y procurarse un derecho de subsistencia prioritario.

#### **4.5. En procesos disciplinarios del poder judicial**

Por disposición de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Defensa Pública debe asesorar de forma gratuita a los servidores que se encuentren sometidos a un proceso disciplinario o sean llevados ante los tribunales, siempre que se trate de asuntos directamente relacionados con el ejercicio de sus funciones, y que el funcionario se encuentre laborando para el Poder Judicial. De acuerdo con lo establecido en el artículo 152 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pueden tener acceso al servicio de la Defensa Pública los funcionarios del Organismo de Investigación Judicial, de la misma Defensa Pública, del Ministerio Público, así como los demás servidores del Poder Judicial, por

lo que los defensores que se dedican a esta materia disciplinaria participan en diferentes procesos ante la Inspección Judicial, la Inspección de la Defensa Pública, asuntos internos del Organismo de Investigación Judicial y la Inspección Fiscal.

#### **4.6. En procesos seguidos contra notarios y notarias**

El Código de Notariado contempla la participación de defensores públicos en los procesos disciplinarios que se siguen contra notarios, pero solo cuando estos se encuentran ausentes. En consecuencia, en estos casos, las personas defensoras públicas cumplen también con la función de curadoras procesales del o de la ausente. El artículo 153 del Código Notarial establece: “[...] Para efectos de la notificación del traslado y notificaciones posteriores, se estará a lo previsto para los procesos civiles. En los casos de ausencia del notario sin apoderado inscrito, la notificación se realizará por medio de un edicto que se publicará en el boletín judicial y el proceso seguirá con un defensor público”.

#### **4.7.- En proceso de contravenciones y tránsito**

En lo que se refiere a estas materias, no se localizaron normas legales expresas que regularan el beneficio de asistencia legal gratuita con la intervención de la Defensa Pública. Sin embargo, debido a que el proceso contravenacional es un proceso penal especial, se aplican a este las normas generales contempladas en el Código Procesal Penal, dentro de las cuales se encuentra la participación de la Defensa Pública, como se señaló.

5 Resolución n.º 2001-8926 de la Sala Constitucional, de las quince horas con cinco minutos de septiembre de dos mil uno.

No obstante, debido a la imposibilidad de satisfacer la demanda de servicios en esta materia, se han restringido el otorgamiento del beneficio y la designación de la persona defensora pública, al menos en la fase de juicio, y en casos que podría implicar directamente una pena de prisión o cuando, durante la ejecución de la sanción impuesta, la pena de multa se convierta a prisión.

Para los demás casos, la Defensa Pública designa a las personas defensoras dependiendo de su capacidad institucional, otorgándoles prioridad a aquellos casos que tienen un efecto más gravoso sobre los derechos de las personas.

La intervención de la Defensa Pública en el proceso contravencional se estableció vía circular n.º 3-2003 de la Corte Suprema de Justicia, denominada “Reglas prácticas en relación con indagación situación económica del imputado, para determinar cuantía del día multa y con la asignación de defensor público en materia contravencional”, en la cual se dispuso:

*La corte plena, en sección N° 54-02, celebrada el 2 de diciembre de 2002, artículo XVII, dispuso comunicarles que [...] 2.- En relación con la asignación de Defensor Público en materia contravencional se recomienda lo siguiente: a- Tratándose de contravenciones sancionadas directamente con pena de prisión, porque el imputado es reincidente y en los casos en que el imputado esté sometido a prisión preventiva, deberá asignarse un defensor al menos para la realización del juicio oral; así como también en la fase de ejecución cuando la*

*multa se convierta a prisión. En estos casos deberá prevenirse la designación de un defensor privado y se asignará el defensor público cuando el primero no sea designado conforme a la normativa vigente. b. Para los demás casos en materia contravencional los servicios de Defensa Pública se asignarán conforme a la ley a los lineamientos de la Sala Constitucional sobre esa materia y a las directrices emanadas por la Jefatura de la Defensa Pública, como ha venido funcionando hasta la fecha, en los casos que corresponda y siempre que no sea asignado un defensor particular.*

En igual sentido, los deberes de la Defensa Pública de asignar a una persona defensora pública en procesos de tránsito se encuentra limitada por las posibilidades reales de la institución y en la medida en que otras áreas prioritarias no se vean afectadas, según se extrae de la circular del consejo superior que se cita a continuación. Propiamente en los procesos de tránsito, la participación de la Defensa Pública se encuentra descrita en la circular 102-2002 del Consejo Superior:

*El Consejo Superior en sección N° 73-2000 celebrada el 14 de setiembre del 2000, artículo LXVII, acordó ponerles en conocimiento el informe del Magistrado González, presidente de la Comisión de Asuntos Penales, que en lo que interesa literalmente dice: “3. Conclusiones. La Defensa Pública en la medida de sus posibilidades reales, ha dotado de defensor público a aquellas personas que han solicitado sus servicios en*



*materia de tránsito, pero sin que ello signifique el descuido de áreas prioritarias como la penal, en que la falta de atención si acarrea vulneraciones a derechos fundamentales establecidos en la constitución política, pactos y tratados internacionales y la ley. Es decir, la defensa en vista de las limitaciones evidenciadas ha tenido que establecer prioridades en el servicio, siendo la primera de ellas el atender aquellos asuntos en que se peligra la libertad personal de los usuarios. Siendo la materia de tránsito una materia en la que no ocurre esa situación y, además, como bien lo reconoce el mismo usuario consultante, pudiendo ejercer el imputado en forma personal su defensa sin que esto le traiga como consecuencia alguna vulneración a sus derechos como bien lo ha decidido la Sala Constitucional, la participación de la defensa pública se limita a la medida en que otras áreas prioritarias no se vean afectadas.*

Por tanto, en esta materia de tránsito, queda el otorgamiento del beneficio de asistencia legal por medio de una persona defensora pública a criterio y valoración de la Oficina de la Defensa Pública de cada región y supeditado a la disponibilidad del recurso en el momento y caso concreto.

#### **4.8.- Como curadores procesales**

De conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Consultorios Jurídicos y en el 68 del Código Civil, la Defensa Pública

también debe designar a defensores públicos para que cumplan con la función de curadores conforme lo establece la Consultorios Ley Jurídicos, en defecto de las personas a las que, según el artículo 68 del Código Civil, debe darse preferencia.

El artículo 3 de la Ley de Consultorios Jurídicos establece que, cuando en algún juicio atendido por los consultorios jurídicos, se deba designar un curador *ad litem*, a falta de alguna de las personas referidas en el artículo 68 del Código Civil, el juez hará la elección en un defensor público. Igual regla se seguirá cuando haya que nombrar un juez ejecutor para realizar alguna diligencia judicial. El designado no podrá cobrar honorarios, el cargo es obligatorio y estará sujeto a las obligaciones que le fija la Ley de Defensores Públicos.

Por su parte, el artículo 68 del Código Civil establece el orden de preferencia en el nombramiento de curador, propiamente señala este artículo: “En la elección del curador se dará preferencia: • Al cónyuge presente, siempre que no esté separado de hecho o de derecho; • A los herederos presuntivos; • A los que mayor interés tengan en la conservación de los bienes. A falta de las anteriores personas, el juez designará curador”.

Interpretando literalmente dichos artículos, debe concluirse la asistencia legal gratuita a través de la Defensa Pública y, para el cumplimiento de estas funciones, se encuentra limitada básicamente a aquellos procesos en los que intervienen los consultorios jurídicos y que, además, se haya agotado la posibilidad de nombrar a alguna de las personas enumeradas en el artículo 68 del Código Civil.

#### **4.9. Asistencia legal gratuita en materia laboral**

La asistencia laboral gratuita es reconocida en materia laboral de forma novedosa a partir de la entrada en vigor, el 25 de julio de 2017, de la Reforma Procesal Laboral, según Ley 9343, concibiendo a este servicio como un beneficio para las personas trabajadoras de escasos recursos económicos o en condiciones de vulnerabilidad, con la finalidad clara de garantizar el acceso a la justicia laboral sin poner en grave riesgo el principio de irrenunciabilidad de sus derechos.

La primera manifestación del reconocimiento de este beneficio en esta materia, pero a cargo de los abogados del Patronato Nacional de la Infancia, surge del contenido del artículo 453 del Código de Trabajo, cuando establece que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) suministrará asistencia legal gratuita a las personas trabajadoras menores de edad que necesiten ejercitar acciones en los tribunales de trabajo, así como a las madres para el reclamo de sus derechos laborales relacionados con la maternidad.

La novedad es que esa entidad debe brindar también ese tipo de asistencia a las madres, pero únicamente cuando su pretensión verse sobre reclamos vinculados con la maternidad. Al respecto, hay que manifestar que, en la práctica, siempre es una persona defensora pública la que brinda la asistencia legal en los casos de personas menores trabajadoras y las madres, pues esta normativa no es excluyente, y rara vez cuando se le da participación al PANI, se apersonan al proceso.

La segunda manifestación y reconocimiento de este derecho surgen del contenido del artículo 454 *ibidem*, en el cual se establece que las personas trabajadoras, cuyo ingreso

mensual último o actual no supere dos salarios base del cargo de auxiliar administrativo (en este momento corresponde a la suma de 806 800 00 colones), tienen derecho a asistencia legal gratuita, costeadas por el Estado para la tutela de sus derechos en conflictos jurídicos individuales.

Pero esta limitación económica indicada no rige para las madres ni las personas menores de edad respecto a la asistencia especial del Estado a que tienen derecho ni para casos de discriminación.

Para el cumplimiento del propósito de garantizar la asistencia legal gratuita, se contempló que, en el Departamento de Defensores Públicos del Poder Judicial, funcionará una sección especializada totalmente independiente de las otras áreas jurídicas, con profesionales en Derecho denominados abogados o abogadas de asistencia social, encargados de brindar gratuitamente el patrocinio letrado a las personas trabajadoras que cumplan el requisito indicado en el párrafo primero de esa norma.

Asimismo, de forma novedosa, se instauró un sistema que denominé de autosubsistencia de la sección especializada creada, pues se dispuso que de los dineros por costas personales que se generen a favor de la parte patrocinada por la asistencia social recibida, se distribuirá un cincuenta por ciento (50%) del total recaudado para la sección especializada del Departamento de Defensores Públicos del Poder Judicial que se crea en este artículo, y que se destinará a la universalización de su cobertura en todo el territorio nacional. El otro cincuenta por ciento (50%) restante fue destinado para el Fondo de Apoyo a la Solución Alterna de Conflictos que se crea en esta ley.

Ahora, se considera que, por la gran cantidad de procesos que se tramitan a nivel nacional de donde en un porcentaje alto se obtiene la victoria, esta sección especializada de abogados y abogadas de asistencia social tiene garantizados la permanencia y su financiamiento.

Por ello, lo que me parece desafortunado en esta reforma es que, del contexto del numeral 454 citado, se pretenda garantizar el derecho a una asistencia social gratuita, sujeto a parámetros relacionados con los ingresos mensuales de la persona usuaria, pues se previó el sostén económico de la sección especializada para garantizar los servicios y, en esas condiciones, la selección de casos con el parámetro de ingresos de la persona usuaria lesiona el derecho fundamental de tutela judicial efectiva para los casos no seleccionados.

Por lo demás, me parece que, en esta materia, la reforma vino a marcar importantes avances en el desarrollo de la figura de la asistencia legal gratuita a través de la defensoría pública. Sobre todo, si se considera que, aunque esta materia siempre ha sido considerada de “carácter social”, antes de la reforma, la persona trabajadora tenía que presentar la demanda *apud acta* y litigar sin patrocinio letrado, lo cual siempre fue cuestionado desde el punto de vista del compromiso del principio del juez imparcial y de la indefensión de la persona trabajadora.

#### 4.10. Asistencia legal gratuita en agrario

En esta materia, el acceso a la Justicia es muestra de la “democratización” y “socialización” del proceso agrario. Se pensó en su momento que el acceso a la Justicia

agraria podía ser utópica, si no se contaba con los recursos necesarios para pagar un abogado o una abogada litigante.

Por eso, en esta disciplina, se ha logrado una mayor democratización al crearse la figura del defensor público agrario o de los procuradores agrarios, a favor de los campesinos de escasos recursos económicos. La aplicación del instituto en esta materia se extiende a la asesoría en los asuntos derivados por el uso de las tierras, según lo contemplado en la Ley de Jurisdicción Agraria, tal y como lo establece el artículo 25 de dicha legislación:

*Tratándose de personas de escasos recursos, a juicio del tribunal, contra quienes se establezca cualquiera de las acciones, cuyo conocimiento compete a la jurisdicción agraria, el juez podrá, a solicitud del accionado, delegar la defensa de éste en un miembro del cuerpo de defensores públicos. Análoga medida deberá acordar el tribunal cuando el demandado se encuentre en cualquier otra de las situaciones previstas en el artículo 133 de Ley Orgánica del Poder Judicial* <sup>6</sup>

Con esta norma, se logra, al menos, una asesoría de un letrado para campesinos de escasos recursos económicos. La ley no indica qué se entiende por campesinos de escasos recursos económicos; pero se ha estimado que por tal debe entenderse “al campesino que no se halle en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por ley debe alimentos”.

6 Zeledón, Ricardo. (1999). Código Agrario. 9<sup>ed.</sup> San José, Costa Rica: Porvenir. Artículo 25.



Y queda a criterio del juez o de la jueza disponer si otorga ese beneficio o no. Asimismo, se tomó en cuenta que, para que realmente se logre un equilibrio entre las partes, esos profesionales de la Defensa Pública deberían ser especialistas en derecho agrario y, para tal efecto, la Corte dispuso crear, dentro del Departamento de Defensores Públicos, una sección especializada para conflictos agrarios. La asesoría es gratuita y técnica. La norma tuvo al principio una limitación, pues, como se ha visto únicamente, se refiere a la persona demandada o accionada en un proceso agrario, sin solucionar el problema de campesinos de escasos recursos que desean plantear una demanda y no tienen dinero para pagar a un abogado o una abogada.

Pero esa limitación dichosamente fue solventada con la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, en cuyo artículo 152, se dispuso la defensa pública en procesos agrarios para la parte que lo solicite y reúna los requisitos que establezca la ley. Con ello tanto actores como demandados, campesinos de escasos recursos pueden acogerse a ese beneficio, siempre y cuando demuestren esa condición ante el juzgado agrario correspondiente. La jueza o el juez queda facultado para, atendiendo las probanzas y manifestaciones de la persona interesada, otorgar el beneficio o bien revocarlo en el momento en que constate que no califica para concederlo. Por otra parte, las personas defensoras públicas agrarias tienen también un fuerte deber dentro del proceso agrario, el cual es lograr equilibrar en la relación procesal a su representado.

También, en esta materia, existe aprobado el Código Procesal Agrario, Ley N.º 9609 del 27 de septiembre de 2018, el cual deroga la Ley de Jurisdicción Agraria y tiene previsto entrar a regir a partir del 28 de febrero de

2023. Y resulta importante señalar que, en su artículo 44, esta normativa regula el beneficio de asistencia legal gratuita a través de la Defensa Pública, cuando se señala que: “Las partes deberán actuar con patrocinio letrado, salvo que sean profesionales en derecho. Se otorgará el patrocinio letrado gratuito, conforme lo establece esta ley [...]”.

Asimismo, en el numeral 47 de ese mismo cuerpo normativo establece que “Las defensoras y los defensores públicos agrarios tendrán las facultades de directores del proceso, en los procesos en que intervengan, salvo que la parte amplíe sus atribuciones a las de un apoderado especial judicial, lo cual deberá indicar expresamente [...]”. Los dineros por costas personales que se generen a favor de la parte patrocinada por la Defensa Pública agraria se distribuirán de la siguiente manera:

- a) Un cincuenta por ciento (50%) del total recaudado será asignado al Fondo de Apoyo a la Defensa Pública Agraria, para optimizar el servicio y la cobertura en el territorio nacional.
- b) Un cincuenta por ciento (50%) restante será depositado en el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia Agraria para garantizar la eficacia y la eficiencia del servicio público agrario. La administración de esos recursos se regirá conforme a la normativa, ambos fondos serán administrados por el Poder Judicial.

Vemos cómo esta nueva normativa procesal agraria implementa el mismo mecanismo de recaudación de los dineros obtenidos por costas personales que se generen a favor del patrocinado por la defensa para ser invertidos en la optimización de los servicios, así como la

cobertura en el territorio nacional y garantizar la eficacia y la eficiencia del servicio público agrario. Lo anterior constituye un gran avance en el desarrollo del instituto de la asistencia legal gratuita.

Sin embargo, en el artículo 51 del Código Procesal Agrario, también se sujeta el otorgamiento del derecho a la asistencia social gratuita al parámetro de ingresos mensuales de la persona usuaria. En ese sentido, este último artículo citado señala:

*Defensa técnica gratuita. Las partes tendrán acceso a la defensa técnica gratuita especializada, siempre y cuando acrediten plenamente que carecen de recursos económicos suficientes, para lo cual deben emitir una declaración jurada ante la Defensa Pública, cuyos datos serán verificados por esta. Las partes interesadas deberán pedir directamente este beneficio en las oficinas de la Defensa Pública de cada circuito judicial y se acreditará su aceptación en la primera resolución que dé curso al proceso. Si se acredita que quien solicita la defensa técnica tiene recursos económicos suficientes para sufragar el costo de la asesoría legal, dicha dependencia requerirá su pago, mediante de los mecanismos legales pertinentes.*

#### 4.11. En materia de familia

En esta materia, sucede algo muy particular dado que el derecho a la asistencia legal gratuita se encuentra contemplado en el artículo 7 del Código de Familia, al estipular que, para hacer valer los derechos

consignados en el Código, quienes carecen de asistencia legal y de recursos económicos para pagarla tienen derecho a que el Estado se la suministre conforme a la ley.

No obstante, en la práctica, este derecho solo ha tenido eficacia para pensiones alimentarias y violencia doméstica. De esta manera, el acceso a la Justicia en materia de familia, aunque considerada de “carácter social”, es muy relativa y cuestionable. Y en ese campo, también existe una reforma procesal con la promulgación del Código Procesal de Familia, Ley N.º 9747 del 23 de octubre de 2019. Sin embargo, esta normativa no entra a regir hasta el 1 de octubre de 2024 y, en ella, no se contempla el instituto de la asistencia legal gratuita, lo que constituye un retroceso. La jurisprudencia de la Sala Constitucional lo que ha considerado es que se trata de una mera falla legislativa, ya que, aunque regulado el derecho, no se dispuso con claridad en el Código de Familia la forma en la cual se brindaría dicha asistencia gratuita. Tampoco en los fallos, ha contribuido con la materia, pues, mediante sentencia 7693 de las catorce horas cuarenta y ocho minutos del siete de agosto de dos mil dos, externó el siguiente criterio:

*De conformidad con la jurisprudencia de este Tribunal, la asistencia letrada gratuita, -como parte del derecho de defensa -, es exigible en materia penal y no se extiende a todas las materias, tampoco a la de familia [...] De ahí que no pueda concluirse otra cosa que el reparo formulado no constituye una infracción constitucional y es una omisión de técnica legislativa.*

Lo transcrito pone de manifiesto que, al momento de emitir este fallo, la Sala

Constitucional no consideró la falta de asistencia legal gratuita en los procesos de familia como un acto inconstitucional o como una acto que viniera a violentar los derechos humanos de los individuos, sino como una mera falla legislativa.

Si bien es cierto, existe esa falla legislativa, ya que no se dispone con claridad en el Código de Familia la forma en la cual se brindará dicha asistencia gratuita, sí constituye una flagrante violación de los derechos humanos individuales, porque la persona que no cuente con los medios necesarios para procurarse los servicios de un abogado o una abogada verá directamente denegado su derecho de acceder a la Justicia, siendo lo más preocupante que este es un problema de índole cotidiano, pues, en un país como Costa Rica, muchas personas no pueden contratar esta clase de servicios y, a su vez, no comprenden por qué razón no pueden ejercer su derecho de defensa en los diferentes procesos de familia a pesar de que tienen todo el derecho de hacerlo.

## 5. CONCLUSIONES

- - Al concluirse el estudio, resulta claro que la situación económica de las partes sí viene a desequilibrar su posición en el contradictorio, vulnerando el principio constitucional de acceso a la Justicia. Por ello se considera que es una obligación del Estado procurar que cualquier persona pueda acceder libremente a los órganos jurisdiccionales para poder dirimir sus conflictos, lo cual implica un acceso libre e igualitario a la Justicia impartida por el Poder Judicial.
- - Así, la asistencia legal gratuita debe ser concebida más que como un beneficio,

como un derecho, un instrumento esencial para la promoción y defensa de los derechos fundamentales de los individuos, y sustancialmente como un mecanismo que pugne por ese amplio sector de la población que ve vulnerados sus derechos por el factor monetario.

- - De esta forma, el derecho a la asistencia legal gratuita consagrado en el artículo 13 de la Ley de Pensiones Alimenticias empezó siendo genérico tanto para la persona acreedora como para la obligada alimentaria, pero por la vía de la interpretativa, se dirigió solo a proteger los derechos de las personas acreedoras alimentarias, lo anterior, atendiendo a que el objetivo de la ley era dotar a la parte más débil y necesitada de los medios idóneos para exigir y procurarse un derecho de subsistencia prioritario.
- - En nuestro país, en la asistencia legal gratuita en ciertas materias como en la penal, se encuentra estructurado bien el derecho, y su reconocimiento se ha mantenido estable, mientras que, en otras como la civil, no se presenta ningún reconocimiento, salvo en el caso de la acción civil resarcitoria que se tramita en un proceso penal.
- - También en otras materias, el derecho se ha visto limitado o restringido, como es el caso de contravencional, tránsito y pensiones alimenticias, en las que se ha supeditado el derecho a las posibilidades reales de la institución o se ha negado el derecho a una de las partes. Y en el caso especial de la materia de familia, aunque regulado el derecho, no se dispuso con claridad en



el Código de Familia la forma en la cual se brindaría dicha asistencia gratuita, por lo que su reconocimiento ha sido nulo por una mera falla legislativa. Más preocupante es que, en la materia de familia, también se promulgó una reforma procesal, pero en esta nada se contempló respecto a este instituto.

- - Sí hay que reconocer que, en los últimos años, se ha concientizado sobre el tema y se han realizados esfuerzos para romper con las barreras que coartan el acceso a la Justicia a un sector de la población vulnerable por razones económicas. En ese sentido, hay que resaltar que se han promulgado reformas procesales importantes como la laboral y agraria, en cuya normativa, se contempla un reconocimiento integral y efectivo del beneficio de la asistencia legal gratuita institucionalizada a través de Oficina de la Defensa Pública y en pro de la población meta.
- - Solo me parece desafortunado que, en estas reformas, se pretenda garantizar el derecho a una asistencia social gratuita, sujeto a parámetros relacionados con los ingresos mensuales de la persona usuaria, ya que se previó el sostén económico de la sección especializada para garantizar los servicios y, en esas condiciones, la selección de casos con el parámetro de ingresos de la persona usuaria lesiona el derecho fundamental de tutela judicial efectiva para los casos no seleccionados. Por lo demás, me parece que, en estas materias, la reforma vino a marcar importantes avances en el desarrollo de la figura de

la asistencia legal gratuita a través de la defensoría pública.

Para concluir estas reflexiones, queremos enfatizar, como nos enseña el eminente jurista Antonio Celso Alves Pereira<sup>7</sup>, que el acceso a la Justicia constituye una de las formas más eficientes de materializar los derechos humanos. Y, en caso de las poblaciones integrantes de los estratos sociales y económicos menos favorecidos, es indispensable contar con la asistencia jurídica integral y gratuita a ser prestada por el Estado a través de la defensoría pública, bajo pena de afrontar los principios de la no discriminación que es parte integrante de la idea de derechos humanos.

## BIBLIOGRAFÍA

### Libros

- Artavia Barrantes, Sergio. *Derecho procesal civil*. Tomo II. Editorial Jurídica Dupas.
- Couture Eduardo. (1993). *Fundamentos del derecho procesal civil*. Buenos Aires: Ediciones Depalma.
- Herrera Castro, Luis Guillermo. (2004). *Un nuevo modelo de administración de justicia. Democracia, justicia y dignidad humana*. Comp. Juan Marcos Rivero Sánchez, Javier Llobet Rodríguez. 1.<sup>a</sup> Edición. San José, Costa Rica: Editorial Jurídica Continental.
- Roldán Bulnes, Facundo y Gastón Vidal Queta. (2001). *Acceso a la Justicia: propuesta para su optimización*. Buenos Aires: Editores del Puerto. S.A.

7 Pereira, Antonio Celso Alves. (Julio-diciembre de 1994). El acceso a la justicia y los derechos humanos en el Brasil. En *Revista IIDH*. N.º 20. San José, Costa Rica. IIDH, p. 23.

- Pereira, Antonio Celso Alves. (Julio-diciembre de 1994). El acceso a la Justicia y los derechos humanos en el Brasil. En *Revista IIDH*. N.º 20. San José de Costa Rica, IIDH, p. 23.
- Solano, Fernando. La asistencia legal universitaria. *Revista de Ciencias Jurídicas*. N.º 46, pp. 59 y sig. 13.

## Diccionarios

- Cabanellas, Guillermo. (1989). *Diccionario enciclopédico de derecho usual*. Volumen 1. Edición 21. Argentina, Buenos Aires: Editorial Heliasta.
- Cabanellas de Torres, Guillermo. (1994). *Diccionario jurídico elemental*. Editorial Heliasta. S.R.L. Revistas
- López Velásquez, Delfina Lucrecia. (1990). La necesidad de crear defensores públicos en la asistencia judicial gratuita. Guatemala: Editorial Universidad Mariano Gálvez de Guatemala.
- Montón Redondo, Alberto. (1985). El derecho a litigar sin gastos ante los tribunales civiles. (Los presupuestos para su concesión y utilización). *Revista Justicia*. N.º 85. España. Volumen 2.
- Muñoz Cascante, Marta Iris. (Octubre de 2003). Trayectoria de la defensa pública costarricense. *Revista Defensa Pública*. Primer Congreso Interamericano de Defensorías Públicas. San José, Costa Rica, pp. 23-34.
- Zeledón Zeledón, Ricardo. (Mayo 19-23 de 1997). *Congreso del Comité Americano de Derecho Agrario*. 1.º Liberia, Costa Rica.

(1998). *Justicia Agraria y Ambiental en América: Memorias. La modernización de la justicia agraria y ambiental*. Costa Rica, Editorial Guayacán, Tesis 97.

- Derecho a justicia gratuita en España. Justicia gratuita en España. *Boletín* n.º 54. <http://www.peritaje.com/portal/Boletín/boletin.asp?Boletín=54>

## Códigos

- (2002). *Código Procesal Penal*. Concordado, índice alfabético y con espacios para anotaciones en cada artículo. Ulises Zuñiga Morales. 6.ª ed. San José, Costa Rica: Editorial IJSA.
- (1999). *Código Agrario*. Compilado por Ricardo Zeledón. 9.ª ed. San José, Costa Rica: Porvenir.
- (2016). *Código de Trabajo. Ley 9343*. Actualizado y concordado por Fernando Bolaños Céspedes.
- (2018). *Código Procesal Civil. Ley 9342*. Jorge López González.
- (27/09/2018). *Código Procesal Agrario. Ley 9606*.
- (23/10/2019). *Código Procesal de Familia. Ley 9747*.

## Leyes

- (1994). *Ley Orgánica del Poder Judicial N.º 7333*. Publicaciones Jurídicas.
- (2000). *Ley de Justicia Penal Juvenil*. 2.ª ed. San José, Costa Rica. Editorial IJSA.
- Ley de Extradición*.

*Ley de Pensiones Alimentarias.*

*Ley N.º 7442* del Ministerio Público, San José, Costa Rica.

### **Circulares de la Corte Suprema de Justicia**

Circular 3-2003 de la Corte Suprema de Justicia.

Circular 102-2002 del Consejo Superior. Documentos Especiales. 1. Centro Virtual del Poder Judicial.